

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ
DEMANDADO	TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.
RADICADO	05360-31-05-001-2018-00179-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Reintegro por estabilidad laboral reforzada, empleador en trámite de liquidación judicial.
DECISIÓN	Modifica, revoca, y confirma.

*Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)*

*Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con los acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ** contra la sociedad **TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto,

de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 035**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir, por parte de este colegiado, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagui – Ant., en la audiencia pública celebrada el día el 18 de julio de 2019, dentro del proceso referenciado.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso en síntesis que, el señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ el día 10 de julio de 2013, suscribió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, con la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A., para desempeñar el cargo de “auxiliar de bodega”, y devengando como salario la suma mensual de \$589.500, y a partir del 28 de enero de 2014, las partes decidieron celebrar un contrato de trabajo a término indefinido

Relata la activa, que desde el año 2015, y encontrándose vigente la relación laboral con la demandada, el actor fue diagnosticado con “VIH”, “TUMOR MALIGNO DEL PENE”, “TUBERCULOSIS RESPIRATORIA”, y “HEPATITIS B”, enfermedades que le generaron un deterioro de su estado de salud, y le impidieron desempeñar eficazmente sus labores, y debió ser incapacitado en varios periodos por la EPS SURA, la primera incapacidad inició el día 8 de octubre de 2015.

Que la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A., a pesar de tener pleno conocimiento del estado de salud del demandante, procedió a dar por terminado el contrato de trabajo el día 14 de abril de 2018, en forma unilateral e injusta, desconociendo con ello que el actor se encontraba amparado con una estabilidad laboral reforzada dada su condición de salud, y el padecimiento de una enfermedad catastrófica, y por ello el empleador estaba

obligado a seguir los lineamientos establecidos en el art. 26 de la Ley 361 de 1997.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas:

#### **“DECLARATIVAS**

*PRIMERO: Se declare LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO celebrado entre mi poderdante señor CARLOS MARIO TORRES LOPEZ y TRANSPORTES METROENTREGAS S.A, desde el pasado 10 de julio de 2013 hasta el 27 de enero de 2014 y; LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO desde el 28 de enero de 2014 hasta la fecha.*

*SEGUNDO: Se declare la INEFICACIA DEL DESPIDO, por encontrarse el señor CARLOS MARIO TORRES LOPEZ, bajo los parámetros Constitucionales y Legales de la Estabilidad Laboral Reforzada.*

#### **CONDENAS**

*PRIMERA: Condenar a TRANSPORTES METROENTREGAS S.A, a reintegrar al señor CARLOS MARIO TORRES LOPEZ, en el cargo que venía desempeñando a partir del 16 de abril de 2018.*

*SEGUNDO: Condenar a TRANSPORTES METROENTREGAS S.A, a cancelar las prestaciones sociales adeudadas al momento de dar por terminado el contrato, las cuales son: consignación de cesantías del año 2017, intereses de las cesantías, pago de cesantía del 01 de enero del 2018 hasta el 15 de abril del 2018, sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, vacaciones remuneradas desde el 16 de diciembre del 2017 hasta el 15 de abril del 2018, prima de servicio desde el 16 de Diciembre de 2017 al 15 de abril del 2018; junto con la sanción moratorio del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago de los anteriores conceptos.*

*TERCERO: Condenar a TRANSPORTES METROENTREGAS S.A, a cancelar las prestaciones sociales dejadas de percibir por el tiempo que estuvo cesante, las cuales son: salarios, primas de servicio, cesantías, intereses a las cesantías, sanción del artículo 99 de la ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías, vacaciones remuneradas, dominicales y festivos, aportes al sistema general de pensiones y de salud, junto con la sanción moratorio del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago de los anteriores conceptos.*

*CUARTO: Condenar a TRANSPORTES METROENTREGAS S.A, a reconocer y pagar la indemnización establecida por el artículo 26 de la ley 361 de 1997, equivalente a la suma de ciento ochenta (180) días de salario.*

*QUINTA: Condenar a TRANSPORTES METROENTREGAS S.A, a cancelar las costas y agencias en derecho, y lo que ultra o extra petita se declare probado.”*

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Admitida la demanda, y corrido el traslado de rigor correspondiente, la demandada dio respuesta oportuna, a través de su apoderada judicial (fls. 124 al 127 y 149), indicando frente a los hechos allí narrados, que no le constan aquellos que aluden a la existencia de contratos de trabajo suscritos con el demandante, y el estado de salud de este, toda vez que la sociedad accionada se encuentre en liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006, y su liquidador solo está al tanto del proceso de liquidación como tal, y por ello se atiende a lo que resulte probado en la litis, pues la finalidad del proceso liquidatorio no es la de desconocer los derechos laborales de los trabajadores; se opuso a la totalidad de pretensiones y cargos, y formuló en su defensa la excepción previa de *“INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”*, sin embargo, esta fue desestimada por la juez de primer grado en la audiencia realizada el 29 de mayo de 2019.

#### **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública de trámite y juzgamiento celebrada el 18 de julio de 2019, la señora JUEZ DE CONOCIMIENTO profirió sentencia, ORDENANDO a la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. a reintegrar al señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ, en el cargo de “auxiliar de bodega”, o en uno de igual o superior jerarquía, compatible con su discapacidad, sin solución de continuidad.

En consecuencia, CONDENÓ a la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. en liquidación judicial a reintegrar al actor y al pago de las siguientes sumas y conceptos:

- A. \$12.130.002 como salarios dejados de cancelar.
- B. \$555.550 por auxilio de cesantías causada al 31-12-2018.
- C. \$47.388 por intereses a las cesantías causados al 31-12-2018.
- D. \$555.550 por prima de servicios.

E. \$4.687.452 por concepto de indemnización del art. 26 de la Ley 361 de 1997.

En tercer lugar, CONDENÓ a la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL a pagarle al actor los derechos laborales causados desde el 1° de enero de 2019 y hasta cuando efectivamente se realice el reintegro.

En cuarto lugar, CONDENÓ a la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL al pago los conceptos adeudados a la terminación del vínculo laboral, así:

- A. \$945.599 auxilio de cesantías.
- B. \$94.104 intereses a las cesantías.
- C. \$227.862 prima de servicios.
- D. \$113.801 vacaciones.

En quinto lugar, CONDENÓ a la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral desde el 16 de abril de 2018 y hasta la fecha del reintegro.

Finalmente, ABSOLVIÓ de las demás pretensiones y cargos, e impuso las costas del proceso en primera instancia a cargo de la demandada y favor del demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$3.048.776 más un (1) SMLMV por la obligación de hacer impuesta.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que al demandante le asiste derecho al reintegro y pago de salarios y prestaciones sociales deprecadas, tanto las adeudados durante la vigencia de la relación laboral, como lo causados luego de producirse el despido, pues la sociedad accionada tenía pleno conocimiento del estado de salud del demandante, lo cual una condición evidente en su historia clínica, además, al tratarse de una enfermedad relacionada con la vida íntima y sexual del demandante, este no estaba en la obligación de comunicarle tal situación a su empleador, tal y como lo ha adocinado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Que, al no evidenciarse el pago de salarios y prestaciones durante algunos periodos laborados, y que la accionada no logro desvirtuar lo manifestado en los hechos de la demanda, mediante los comprobantes de pago correspondientes, se accede al pago de los salarios y prestaciones solicitados en la pretensión segunda de condena.

La empresa debió solicitar la autorización ante el ministerio de trabajo, dada la condición de salud del demandante, que lo hacía sujeto de especial protección constitucional, tornados en ineficaz la terminación del contrato de trabajo, además, al tratarse de una enfermedad catastrófica, no se requiere demostrar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia.

Y concluyó indicando que, en el presente asunto si procede el reintegro del demandante, hasta tanto que culmine la liquidación judicial de la empresa TRANSPORTES METROENTREGAS S.A.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La apoderada judicial de la sociedad accionada, mostro su inconformidad parcial frente a la sentencia de primer grado, concretamente frente a la orden de reintegro proferida por la *A Quo*, la cual estima improcedente, toda vez que la empresa TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. se encuentra en liquidación judicial, acogida al régimen de insolvencia empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, lo que implica que la empresa no puede seguir desarrollando su objeto social, salvo los fines liquidatorios, la empresa no está activa, y no tiene un horario establecido para sus trabajadores, pues precisamente uno de los efectos de la apertura del trámite de liquidación judicial, es la disolución de la empresa, y la terminación de los contratos de trabajo con el correspondiente pago de la indemnización por despido injusto, dado el cese de su actividad operacional.

Señala la recurrente, que el reintegro ordenado, constituye una obligación jurídicamente imposible de cumplir, tal y como lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de

Justicia, y cita para ello la sentencia con radicación 40.288 de 2011, M.P. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE. Motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia impugnada en este aspecto.

### **Alegatos de conclusión**

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión.** – Relación laboral, reintegro por estabilidad laboral reforzada Ley 361 de 1997, empleador en tramite de liquidación judicial.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El problema jurídico a resolver, teniendo en cuenta el único punto objeto de apelación por la pasiva, mismo que delimita la competencia de la Sala en la segunda instancia, consiste en dilucidar si el reintegro por estabilidad laboral reforzada ordenado a favor del señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ, resulta o no procedente en atención al estado de liquidación judicial en el que se encuentra su empleador TRANSPORTES METROENTREGAS S.A.

Lo anterior, dado que en el proceso no existe discusión en torno a los siguientes puntos:

- La vinculación laboral del señor TORRES LÓPEZ con la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, a través de dos contratos de trabajo.
- Los extremos temporales.
- La modalidad contractual.
- El salario devengado.
- La terminación ilegal e injusta del contrato de trabajo.

- El estado de debilidad manifiesta que detenta el demandante, que a su vez lo hizo beneficiario de la garantía de estabilidad laboral reforzada de que trata la Ley 361 de 1997, y que derivó en la ineficacia del despido.
- El no pago de algunos salarios y prestaciones sociales a la terminación del vínculo laboral.

Lo anterior por cuanto lo resuelto y condenado frente a estos tópicos, no fue controvertido en apelación por la apoderada judicial de la parte demandada TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

### **Liquidación judicial**

Al respecto debe recordarse que el trámite de liquidación judicial de una empresa, se encuentra regulado por la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la república de Colombia y se dictan otras disposiciones, y concretamente el trámite o proceso de liquidación judicial, se encuentra establecido a partir del art. 47 el referido estatuto normativo.

En este primigenio artículo se establecen las causales por las cuales inicia el proceso de liquidación judicial de una empresa, así

***“ARTÍCULO 47. INICIO. El proceso de liquidación judicial iniciará por:***

*1. Incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999.*

*2. Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la presente ley.”*

Y luego en el art. 50 se señalan los efectos que produce la apertura del proceso de liquidación judicial, entre los cuales se destaca, la terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, veamos:

**“ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.** *La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:*

- 1. La disolución de la persona jurídica. En consecuencia, para todos los efectos legales, esta deberá anunciarse siempre con la expresión “en liquidación judicial”.*
- 2. La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica, si los hubiere.*
- 3. La separación de todos los administradores.*
- 4. La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido por el juez del concurso.*
- 5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelación que les correspondan.**

*(...)”.*

De otro lado, y según se constata en la prueba documental obrante a folios 128 al 135 y 159 al 167 del plenario, consistente en el Auto N° 610-003365 del 15 de noviembre de 2018 expedido por la Superintendencia de Sociedades, y el certificado de existencia y representación legal expedido por la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, la demandada TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. se encuentra en proceso de liquidación judicial, cuyo auto de apertura data del 15 de Noviembre de 2018, por solicitud que hiciere el Dr. Héctor Hugo Ramírez Valencia apoderado judicial de la demandada, de fecha 27 de septiembre de 2018.

### Reintegro por estabilidad laboral reforzada

El reintegro solicitado por el demandante, tiene su razón de ser en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual consagra una protección especial a las personas en estado de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta, a saber:

**“ARTÍCULO 26.** *En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha [discapacidad] sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona [en situación de discapacidad] podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su [discapacidad], salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo*<sup>1[OBJ]</sup>

*No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su [discapacidad], sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren<sup>2</sup>.*

Y según la jurisprudencia nacional (CSJ SL39207-2012, SL14134-2015, SL10538-2016, CSJ SL5163-2017 y CSJ SL17945-2017), la protección de la estabilidad en el trabajo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 está dirigida a la persona que tiene condiciones de salud reducidas para prestar el servicio personalmente, es decir, a aquella que tiene una discapacidad relevante y puede prestar el servicio en condiciones distintas del resto de la sociedad. Dicho de otro modo, el precepto en cuestión busca proteger a las personas que, por la condición de discapacidad relevante, pueden encontrar barreras para acceder, permanecer o ascender en el empleo y que tales barreras pueden ser superadas por el empleador haciendo ajustes razonables. Según el art. 5 de la Ley 361 de 1997, reglamentado por el artículo 7 del D. 2463 de 2001, vigente para la época del despido del actor (15 de abril de 2018).

<sup>1</sup> Aparte subrayado declarado exequible en sentencia C-531 de 2000.

<sup>2</sup> Este inciso fue declarado exequible en la sentencia C-531 de 2000, “...bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”.

Las palabras entre corchetes del artículo corresponden al cambio realizado en cumplimiento a la exequibilidad condicionada declarada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-458-15 de 22 de julio de 2015.

Y es que la garantía a la estabilidad laboral contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, tiene el propósito de brindar protección contra la discriminación en el trabajo (entendida esta como lo prevé el C111 de la OIT y los artículos 7 al 14 de la R169 que es complementaria o reglamentaria del C159). Con este propósito, la estabilidad laboral reforzada sirve de medio idóneo y necesario para la materialización de la readaptación profesional y en el empleo de las personas con una discapacidad relevante en el trabajo, cuyo fundamento específico internacional, para el mundo del trabajo, se encuentra en el C159 y las recomendaciones 99 y 168 de la OIT.

Tales fines son promovidos por los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos de orden universal y americano vinculantes para Colombia con la ratificación (en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93 y demás preceptos de la Constitución que sustentan el concepto de bloque de constitucionalidad), y pregonan y garantizan la inclusión social de las personas en condiciones de «discapacidad» o «invalidez», términos empleados por esos instrumentos internacionales.

Por no discriminación en el trabajo de las personas en estado de discapacidad relevante se ha de entender que ellos deben disfrutar de igualdad de trato y oportunidades en cuanto al acceso, **la conservación y la promoción en un empleo que, siempre que sea posible**, corresponda a su elección y a sus aptitudes individuales. Así se refiere también la R. 168 de la OIT que regula específicamente el tema de la igualdad de las personas con discapacidad en el campo del trabajo.

### **CASO CONCRETO**

En el presente asunto, y conforme la HISTORIA CLÍNICA del señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ visible a folios 24 al 52 del plenario, es evidente que este padece una serie de patologías que sin lugar a dudas lo convierten en un sujeto de especial protección constitucional, y destinatario de la Ley 361 de 1997, tal y como lo analizó la juez de primer grado, lo cual no es objeto de apelación por la parte demandada, y que conllevó a declarar

judicialmente el derecho al reintegro del trabajador, al no haber mediado autorización de la oficina del trabajo.

Sin embargo, estima la Sala que ese reintegro ordenado en la primera instancia, dada la ineficacia del despido, no puede ser indefinido, pues si bien es cierto para el día 15 de abril de 2018 en que se produjo el despido del demandante la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. aún no había entrado en el trámite de liquidación judicial, también resulta evidente que para la fecha en que se profirió la sentencia de primer grado, este empleador se encontraba inmerso en un proceso insolvencia empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, normativa que lo habilitaba para dar por terminados los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, al ser este un efecto directo del Auto de APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, que como bien se sabe se dio mediante auto del 15 de noviembre de 2018, expedido por los Superintendencia de Sociedades.

En efecto, considera esta judicatura que el reintegro del demandante, solo era viable hasta el día **15 de noviembre de 2018**, en que se dio la APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL pues no está probado en el plenario que más allá de la citada fecha, la empresa TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. estuviere ejecutando su objeto social con normalidad, y requiriendo del cargo de “AUXILIAR DE BODEGA”, para el cual fue contratado el señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ, según consta en el contrato de trabajo visible a folios 12 al 15 del plenario, u otro cargo de similar o superior categoría, acorde a las limitaciones y el estado de salud del demandante.

Y es que la parte demandante ni siquiera solicitó la práctica de prueba testimonial, que la permitiré a la Sala determinar sin ninguna duda, que al interior de la sociedad accionada aún existe un cargo que pudiera seguir desarrollando el demandante, y que este se encuentre acorde a su estado actual de salud, lo anterior mientras concluye la liquidación definitiva de la empresa, recayendo la carga de la prueba en este sentido en la parte demandante, tal y como lo tiene establecido en el art. 167 del Código General

del Proceso, normativa según la cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Tornándose así en improcedente el reintegro ordenado más allá del 15 de noviembre de 2018, al haberse proferido al auto apertura de liquidación judicial del empleador, mismo que lo obligaba a dar por terminados los contratos de trabajo, siendo este el entendimiento dado a esta problemática por parte de la Corte Constitucional, como es el caso de la sentencia T-052 de 2020, en la que se declaró la improcedencia de un reintegro a una entidad promotora de salud en proceso de liquidación, veamos:

*“...La Sala precisa que no se pronunciará acerca de la petición de reintegro debido a su improcedencia. Este Tribunal ha considerado que la medida de reintegro no procede “[c]uando la empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona jurídica que la sustenta”. En ese orden, el representante legal de la demandada señaló la imposibilidad de reintegrar a su expleado como quiera que, de acuerdo con la Resolución No. 10895 del 22 de noviembre de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud, que prorrogó el término de la intervención forzosa administrativa para liquidar a SaludCoop EPS en liquidación, hasta el 24 de junio de 2019, la entidad está reduciendo la planta de personal progresivamente hasta culminar el proceso de liquidación...”*

Postura jurisprudencial, que también está en consonancia con la tesis del órgano de cierre en la especialidad laboral y seguridad social, como es el caso de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia con radicación 40.288 del 10 de mayo de 2011, M.P. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE, citada por la recurrente en su recurso de alzada, en que se advirtió la improcedencia del reintegro en empresas que se encuentren en trámites de liquidación judicial, veamos:

*“...Pues bien, aunque ciertamente la entidad disuelta sigue subsistiendo mientras culmina su liquidación, es de acotar que su actividad se reduce a lo estrictamente necesario al proceso de liquidación, sin que pueda continuar desarrollando el giro ordinario de sus operaciones, lo que en lógica consecuencia hace desaconsejable el reintegro tal y como en el sub judicie lo estimó el juez de alzada, toda vez que no es dable gravar a la demandada con una decisión judicial material y jurídicamente imposible de cumplir...”*

Motivos por los cuales habrá de revocarse los resultó frente al reintegro indefinido del demandante, y limitarlo hasta el día 15 de noviembre de 2018, y por ello pasa la Sala a reliquidar los salarios y prestaciones sociales adeudadas al señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ entre el 16 de abril de 2018 (día siguiente al despido) y el 15 de noviembre de 2018, para un total de 213 días, y teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2018, esto es, \$781.242 mensuales y un salario diario de \$26.041,04.

Salarios: \$5.546.741.

Auxilio de cesantías: \$462.235.

Intereses a las cesantías: \$32.957.

Prima de servicios: \$462.235.

Y en cuanto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, estos también quedarán limitados hasta el 15 de noviembre de 2018.

En consecuencia, se modificará el valor de las condenas por estos conceptos, consignadas en los literales A, B, C, y D, del NUMERAL SEGUNDO y el NUMERAL QUINTO de la parte resolutive de la sentencia de primer grado, y se revocará en su integridad el NUMERAL TERCERO de la parte resolutive de la sentencia de primer grado, dada la improcedencia del reintegro deprecado más allá del 15 de noviembre de 2018.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la parte demandada, no habrá lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: MODIFICAR** la sentencia objeto de apelación de origen y fecha conocidos, en el sentido de limitar el reintegro ordenado a favor del señor CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ en razón a la estabilidad laboral reforzada que lo ampara, hasta el día 15 de noviembre de 2018, en que se profirió el Auto N° 610-003365 por parte de la Superintendencia de Sociedades que decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A., según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO: MODIFICAR** el valor de las condenas que se encuentran consignadas en los literales A, B, C, y D, del NUMERAL SEGUNDO, así como la orden establecida en el NUMERAL QUINTO de la parte resolutive de la sentencia de primer grado, los cuales quedaran así:

**NUMERAL SEGUNDO:**

- A). Salarios** adeudados al demandante entre el 16 de abril de 2018 y el 15 de noviembre de 2018: \$5.546.741.
- B). Auxilio de cesantías** adeudados al demandante entre el 16 de abril de 2018 y el 15 de noviembre de 2018: \$462.235.
- C). Intereses a las cesantías** adeudados al demandante entre el 16 de abril de 2018 y el 15 de noviembre de 2018: \$32.957, y
- D). Prima de servicios** adeudados al demandante entre el 16 de abril de 2018 y el 15 de noviembre de 2018: \$462.235.

**NUMERAL QUINTO:** CONDÉNESE a la sociedad TRANSPORTES METROENTREGAS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada legalmente por su liquidador John De Jesús Suaza Chalarca, o por quien haga sus veces, a efectuar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral desde el 16 de abril de 2018 de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018, a favor del CARLOS MARIO TORRES LÓPEZ.

**TERCERO: REVOCAR** en su integridad la condena contenida en el NUMERAL TERCERO de la parte resolutive de la sentencia de primer grado objeto de apelación, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

**CUARTO: DECLARAR** en firme los demás aspectos de la sentencia de origen y fecha conocidos que no fueron objeto de apelación por las apoderadas judiciales de las partes.

**QUINTO: Sin Costas** en esta instancia.

Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° **125** del **19 de julio de 2021**.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>